



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

LA CADENA PERPETUA EN COLOMBIA, PENA O PROPUESTA DE POPULISMO PUNITIVO.¹

UN ESTUDIO COMPARADO EN AMERICA.

Ángela María Mondragón Camero²
Universidad Católica de Colombia

RESUMEN.

En este artículo se hará un análisis de derecho comparado entre Colombia, Estados Unidos, Perú y Chile, en lo que respecta al tratamiento de la cadena perpetua. La importancia de este artículo radica en aprobación del Acto legislativo 01 de 2020 en Colombia, “por medio del cual se modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”

De otra parte, frente a esta modificación constitucional se evidencia que puede ser a causa del populismo punitivo; para lo cual, se hace un estudio basado en un análisis crítico, apoyado en argumentos doctrinales y un estudio constitucional y legal que se deriva frente a esta aprobación legislativa.

De esta manera, concluir que la cadena perpetua no es la creación de una nueva pena, por el contrario, es una modificación que deviene como evidencia del populismo punitivo.

Palabras Claves: Colombia, Populismo, Punitivo, Fines de la pena, Derecho comparado, Dignidad, Estado Social de Derecho, Resocialización.

¹ Artículo dirigido por Lady Andrea Beltrán, docente investigadora de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídico Penales y especialista en Derecho Constitucional, Magister en Derecho con énfasis en Sociología del delito y política criminal.

² Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el título de Abogada por parte de Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo ammondragon00@ucatolica.edu.co.

***THE PERPETUAL CHAIN IN COLOMBIA, PENALTY OR PROPOSAL OF
PUNITIVE POPULISM.***

A COMPARATIVE STUDY IN AMERICA.

ABSTRACT.

This article will make an analysis of the law compared between Colombia, the United States, Peru, and Chile, regarding the treatment of life imprisonment. The importance of this article lies in the presentation and approval of Legislative Act 01 of 2020 in Colombia, "by means of which article 34 of the political constitution is modified, eliminating the prohibition of life imprisonment and establishing revisable life imprisonment."

On the other hand, in the face of this constitutional modification, it is evident that it may be a cause of punitive populism. For which, a study is made based on a critical analysis, supported by doctrinal arguments and a constitutional and legal study that is derived from this legislative approval.

In this way, to conclude that life imprisonment is not the creation of a new sentence, on the contrary, it is a modification that becomes evidence of punitive populism or public policies.

Key Words: Colombia, Populism, Punitive, Purposes of punishment, Comparative Law, Dignity, Social Rule of Law, Resocialization.

SUMARIO

Introducción, 1. Antecedentes históricos de la cadena perpetua 1.2 Definición 1.3 Concepto. 2. Legislaciones Internacionales que regulan y aplican la cadena perpetua 2.1 Estados Unidos. 2.2 Perú. 2.3 Chile. 2.4 Argumentos de Doctrinales a favor de la pena perpetua. 2.5 Argumentos de Doctrinales en contra de la pena perpetua. 3. Definición de populismo punitivo. 3.1. El populismo punitivo en Colombia su alcance para la creación de leyes. 3.1.1 Femicidio 3.1.2 Lesiones con agentes químicos ácido y/o sustancias similares. 4. Cadena Perpetua en Colombia: Antecedentes de la Cadena Perpetua en Colombia. 4.1. Pactos internacionales que ha suscrito Colombia como Estado: Donde se prohíben las penas imprescriptibles, crueles, inhumanas o degradantes. 4.2. Constitucionalidad. 4.3 Fines y funciones de la Pena. 4.3.1 Prevención general 4.3.2 Retribución justa 4.3.3 Prevención especial 4.3.4 Reinserción social. Conclusiones. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

En Colombia, un número considerable de actores políticos actúan en razón a la competencia electoral, las decisiones políticas y la aprobación popular, fundamentalmente por las pretendidas demandas de seguridad ciudadana. Con ocasión a esto, los gobernantes impulsan y maximizan el uso del populismo penal guiados por tres suposiciones:

1. Mayores penas pueden reducir el delito.
2. Las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad.
3. Hay unas ganancias electorales producto de esto (Torres, 2010, p. 21)

Es decir, que el concepto de populismo punitivo, “se materializa principalmente en propuestas tales como el aumento de las penas privativas de la libertad y la creación de nuevos tipos penales; ambas proposiciones son presentadas como la única alternativa o la más efectiva para erradicar la criminalidad, o por lo menos, lograr reducirla” (Del Mar, 2019, p. 58). En concordancia con el párrafo anterior, menciona Sotomayor (2013) “que cuando se trata de delitos en los cuales las víctimas han sido menores, es cuando parece jalinear más la tendencia al uso del populismo punitivo” (p.51).

De este modo, con el Gobierno Nacional actual, han sido frecuentes los pronunciamientos sobre “evaluar la pena perpetua para violadores de niños” (Revista Semana, 2019 p. 1). Este debate surge, con la necesidad de modificar el artículo 34 de la Constitución Política de 1991 que expresa la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, en Colombia.

El Congreso de la República ha tenido ciertas dificultades para aprobar la cadena perpetua, en los debates legislativos donde se ha presentado esta propuesta (Acto Legislativo 23 de 2007, Acto Legislativo 38 de 2007, Proyecto de 1327 de 2009, Proyecto de Acto Legislativo No. 066 de 2018, entre otros) ya sea por su poca racionalidad, su débil justificación o su falta de sustento.

Por lo tanto, analizar desde un punto de vista jurídico y sociológico, el impacto que tiene el populismo punitivo en Colombia y el derecho penal como última ratio, nos permite formular el siguiente planteamiento jurídico:

¿La incorporación de la cadena perpetua en la legislación colombiana, es la respuesta adecuada y eficiente para la prevención, control y significativa disminución de las conductas punibles que se derivan del título IV de la Ley 599 de 2000?

Con la premisa anterior, resulta necesario revisar los argumentos usados para justificar la cadena perpetua, para determinar si es o no viable, si asegura la prevención, el control y la erradicación de los delitos sexuales contra menores.

Para desarrollar el objetivo general y resolver el problema jurídico planteado, se tomará como base, la Constitución Política de 1991, los pactos internacionales que ha suscrito Colombia como Estado donde se prohíben las penas imprescriptibles, crueles, inhumanas o degradantes y el derecho comparado, a través de una metodología documental de carácter doctrinal y jurisprudencial hermenéutica (Agudelo, 2018, p. 20-31) para decantar el tema.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

El principal promotor de la cadena perpetua en Grecia fue Platón (427 – 347 a.c). “Sus ideales sostenían que cada tribunal debía tener su propia cárcel, para que de esta manera fueran juzgados, sentenciados y encerrados de por vida quienes cometieron delitos” (Del Castillo, 2015, p.24). En Roma, el sistema penal no era laxo, por el contrario, además de existir la detención vitalicia, los sujetos considerados como delincuentes, fueron sometidos a torturas crueles, como: “las quemaduras con hierro ardiendo en diversas partes del cuerpo, los azotes, los párpados arrancados, la falta de sueño, o la observación directa del sol” (Espejo, 1996, p. 6). La aplicación de estos actos “viene reflejado desde de la Ley del Talió, ojo por ojo diente por diente que aparecía recogida en la Ley de las XII Tablas del derecho romano y en el famoso Código de Hammurabi” (Montero, 2017, p. 62).

En la edad media, las penas aplicadas se derivaban de los malos tratos, las torturas, y la pena de muerte. Era la iglesia quien orientaba la idea de las prisiones en Europa, especialmente en Italia. “En el siglo XII se construyó la primera cárcel subterránea, esta cárcel tomó celebridad y fue denominada “vete en paz”, pues el que ingresaba allí era considerado muerto” (Del Castillo, 2015, p.25).

Las prisiones en Europa en el siglo XVI, en principio, estaban destinadas a recoger prostitutas vagabundos y delincuentes. Explica Montero, (2017) “que en el siglo XVIII la cárcel fue considerada y aplicada como forma de castigo de una manera formal” (p.62).

En concordancia con lo anterior, la cadena perpetua fue aceptada entonces por el derecho canónico, imponiéndose de manera más fuerte en la inquisición, así se consideraba que “los condenados a cadena perpetua, al no tener esperanza de alcanzar la libertad no se corregían sino que, por el contrario, persistían en sus tendencias o actitudes criminales” (Montero, (2017, p.63), con este argumento, se hacía más fuerte la defensa de aquella época de la pena perpetua, pues aseguraban que al ser delincuentes y sus conductas no eran corregibles, esta era la única manera de mantenerlos alejados de la sociedad y así evitar la comisión de más delitos por parte de ellos.

Beccaria (1968) en su libro de los delitos y las penas resalta:

Para que una pena sea justa, no debe tener más que los grados de intensidad que bastan para separar a los hombres de los delitos; ahora bien, no existe nadie que con reflexión pueda escoger la total y perpetua pérdida de la libertad propia, por muy ventajoso que pueda ser un delito: por tanto, la intensidad de la pena de esclavitud perpetua en sustitución de la pena de muerte tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo determinado (p.58).

Para el siglo VI, Beccaria es quien adopta la cadena perpetua como institución penal, resalta el estilo del encierro perpetuo, “tomándolo como ejemplo eficaz para los demás hombres, impacto que, según él, no se lograría con la pena de muerte” (Del Castillo, 2015, p.26).

Con esto, la pena de prisión perpetua alcanza su auge entre los siglos XIX y XX, diferentes países de occidente optan por incluir en sus legislaciones la prisión vitalicia, en consecuencia, surge entonces como una alternativa de la pena muerte.

Sin embargo, la posibilidad de aplicar penas perpetuas sin limitación de tiempo en algunos países se vio limitado, como en Alemania, que, con el fallo de la Corte Constitucional (Sentencia de la Primera Sala, 21 de julio de 1977. 1BvL 14/76 del STG.) “estableció como

inconstitucional una pena de prisión perpetua sin posibilidad de liberación, por ser contraria a la dignidad humana” (Montero, 2017, p.65)

En España, la implementación de esta pena surgió con el Código Penal de 1848, en efecto, para sustituir la pena de muerte; el Código Penal de 1870 por su parte, establece parámetros para mejorar las condiciones de condena de los presos de cadena perpetua, es decir la privación de la libertad no sería de carácter indefinido, por el contrario, establece una pena de cadena perpetua máxima de 30 años.

Para Inglaterra, luego de la abolición de la pena de muerte “para los homicidios en 1965, se dispuso que el castigo para esos delitos sería el de prisión perpetua” (Montero, 2017, p.66), así, para 1983 se desarrolló el tiempo mínimo de reclusión, que como explica Montero (2017)

El resultado se daba al dividir la duración de esta pena en tres fases: retribución, disuasión y protección de la sociedad y de hacer de las dos primeras fases un tiempo de condena de obligatorio cumplimiento, donde sería los jueces quienes decidirán el tiempo mínimo y obligatorio a cumplir y en casos excepcionales el obligatorio cumplimiento total a la cadena perpetua (p.67).

Finalmente, la historia evidencia que la cadena perpetua a la fecha sigue siendo regulada por diferentes países y que, aunque se ha visto limitada, desde el punto de vista conceptual la posibilidad de erradicarla en un contexto donde prevalecen los Derechos Humanos es limitada.

1.2 DEFINICION

Es una pena privativa de libertad de “carácter indefinido, que normalmente se impone como condena ante un delito grave, y que puede implicar la privación de libertad de por vida” (Córdoba, 2014, p.13). Aguirre (2011) la define como una pena:

Intemporal, indeterminada, rígida, tasada, que en el fondo importa la neutralización del sentenciado, como ser humano al encerrarlo de por vida en un establecimiento penal de régimen cerrado, con un propósito inocuizador de la pena, en contradicción

con postulados constitucionales de reinserción social, resocialización y principios universales de derechos humanos. (p.41)

1.3 CONCEPTO

La cadena perpetua es una sanción penal que puede imponerse en los Estados como una reclusión de por vida, esta pena, puede considerarse la mayor sentencia en las jurisdicciones donde no se aplica la pena de muerte. Aunque con el presidio perpetuo se entiende que la persona debe pasar el resto de su vida en prisión, varía según el país donde se encuentre regulada. Lo anterior, va ligado a la determinación legal de cada delito, además, aunque estas sentencias por su naturaleza son indefinidas, se interponen de distintos modos por cada Estado.

En la Unión Europea, por ejemplo, se conoce como “cadena perpetua revisable o condicionada” y hace referencia a la posibilidad de revisar en determinado tiempo la posibilidad de concederle la libertad condicional al condenado. Para Francia, la revisión prevé un tiempo de no antes de 30 años, Alemania y Suiza 15 años, en Italia la posibilidad de revisar la pena tarda 26 años.

2. LEGISLACIONES INTERNACIONALES QUE REGULAN Y APLICAN LA CADENA PERPETUA.

Como bien se expuso al inicio, este trabajo realizará un comparativo entre los ordenamientos jurídicos de Estados Unidos, Perú, Chile, y Alemania respecto a la aplicación de la pena perpetua. Al estudiar y desarrollar la comparación entre las legislaciones ya mencionadas, se vieron evidenciadas notables diferencias, las cuales el lector podrá observar a continuación:

2.1 ESTADOS UNIDOS.

Debido a su organización Federal, Estados Unidos y cada uno de sus Estados cuenta con sus propios estatutos penales, sistemas de tribunales, fiscales y agencias policiales, “por lo tanto, los códigos penales de los diferentes Estados que integran este país contemplan en su mayoría la pena de la cadena perpetua para delitos que importan especial gravedad” (Del Castillo, 2015, p.101).

Actualmente, “casi todos los Estados cuentan con la posibilidad de imponer penas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional” (Montero, 2017, p.69). Aunque la octava enmienda de los Estados Unidos prohíbe las penas crueles e inusuales, “la Suprema Corte de Justicia ha interpretado que esto significa que las penas deben ser proporcionales al delito que se cometió” (Labardini, 2008, p. 329).

Una situación muy controvertida en Estados Unidos es la posibilidad de condenar a personas menores de edad a castigos perpetuos, sin posibilidad de liberación condicional. Como explica Arce, (2017)

Se tiene que en Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores. Y, además, otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos (p.8).

Para efectos del presente trabajo, se tomará como referencia el Estado de Florida, donde se encuentra la aplicación de la cadena perpetua y la pena de muerte. Para entender la forma de juzgar e imponer una pena, se debe explicar cómo los delitos se encuentran tipificados en el Estado de la Florida; de modo que, The Florida Statutes, en el título XLVI, artículo 775.08 y subsiguientes particiona los delitos que rigen el sistema penal:

Art 775.08 Clases de delitos.

1. Delito Grave: Delito penal que sea punible según las leyes de Florida o que sea punible si se comete en este Estado. Castigado con pena de muerte o encarcelamiento en un centro penitenciario estatal.

2. Delito Menor: Delito que sea punible según las leyes de este Estado, por un período de encarcelamiento en un centro correccional del condado, que no supere 1 año.
3. Violación no penal: Delito que sea punible según las leyes de este Estado, se sancionara con multa, confiscación u otra sanción civil.

El término "delito" significa un delito grave o un delito menor.

Art. 775.081 Clasificaciones de delitos graves y delitos menores:

1. Delito capital: La condena de un delito capital significa que la sentencia impuesta puede ser cadena perpetua o muerte. En Florida, los delitos graves incluyen asesinatos, secuestro armado y algunos delitos graves cuando hay cargos de muerte o sexuales.
2. Delito grave vida: Se castigan con cadena perpetua y una multa de hasta \$ 15,000.
3. Delito grave de primer grado: Castiga con hasta \$15,000 dólares, treinta años de prisión y / o libertad condicional. (Arce, 2017, p. 10)
4. Delito grave de segundo grado: Castiga con hasta una multa de \$10,000 dólares, quince años de prisión y / o libertad condicional. (Arce, 2017, p. 10)
5. Delito grave de tercer grado: Castiga con hasta \$ 5,000 dólares de multa de cinco, años de prisión y / o libertad condicional. (Arce, 2017, p. 10)

De esta manera, el poder de definir un delito y de clasificarlo como un delito grave, un delito menor, o una infracción están solamente en la ley Federal.

Los delitos graves son designados por el Estatuto de Florida y cualquier delito declarado por ley como delito grave, sin especificación de grado, es de tercer grado.

Los delitos menores se clasifican, a los fines de la sentencia y para cualquier otro propósito específicamente estipulado por el estatuto, en las siguientes categorías:

Delito menor de primer grado: Castiga con hasta una multa de US\$ 1000, doce meses de cárcel y / o libertad condicional (Arce, 2015, p.9)

Delito menor de segundo grado: Un delito menor es del grado particular designado por el estatuto. Cualquier delito declarado por estatuto como un delito menor sin especificación de grado es de segundo grado. (The 2019 Florida Statutes)

En consecuencia, los delitos en los que la pena es la prisión vitalicia en sustitución de la pena de muerte son:

Art. 782.04 Asesinato intentado en el primer grado.

Art. 782.04 Asesinato intentado en el segundo grado, para un ofensor habitual de delitos violentos, para delitos de primer grado.

Art. 947.149 Delito de violación sexual

Art. 775.30 Delito de terrorismo. (The 2019 Florida Statutes)

Por lo tanto, en los Estados Unidos existen condenas con dos o más cadenas perpetuas, un ejemplo, es el caso de Joaquín Guzmán alias “El Chapo” que fue condenado por un Tribunal a cadena perpetua y 30 años más. Es decir, que, si la cadena perpetua ha de entenderse como una pena de privativa de la libertad de por vida, ¿por qué se dictan penas acumulativas?

Lo anterior se debe a que cada 15 años la persona es llevada a un comité de evaluación, para verificar su comportamiento, y, la posibilidad de concederle la libertad. Sin embargo, el mínimo de tiempo de prisión de por vida según el Código Penal de Florida no puede ser menor a 30 años (Art. 775.082 The 2019 Florida Statute). De esta manera, si cumpliera con los requisitos que establece el comité para concederle la libertad al condenado, el mismo no podría acceder a ella, por aquellas condenas perpetuas acumuladas, o años de más sumados a su condena en el momento de su juicio.

2.2 PERÚ

El Artículo 140 de la Constitución Política de Perú establece, que, la pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. Su Carta Política, no manifiesta las penas perpetuas. Con esto, hacemos alusión a que Perú, un país de Suramérica no prohíbe la pena de prisión vitalicia.

Sin embargo, el 3 de enero del 2003, el Tribunal Constitucional resolvió que la prisión perpetua o vitalicia sin fecha de liberación es inconstitucional debido a que los fines de “reeducación, rehabilitación y reincorporación” del régimen penitenciario obligan al legislador a prever una fecha en la que la sanción habrá de concluir, lo que posibilitará al individuo encarcelado reincorporarse nuevamente a la sociedad (Lombardini 2010, p.319).

El Código Penal de Perú, establece: "Artículo 29.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años”

Es decir, que el Tribunal añadió que la prisión vitalicia es inconstitucional y también “se opone a los principios de la dignidad de la persona humana, de libertad y que una restricción a la libertad no puede, en cualquier caso, resultar en la anulación de dicha libertad” (Lombardini, 2010, p.320). Actualmente la cadena perpetua puede ser revisada de oficio o a petición de parte por un juez, luego de 35 años de cumplimiento de la pena para la posible libertad condicional de quien fue condenado.

Ahora bien, las figuras delictivas con cadena perpetua en el Perú son numerosas, “se sigue percibiendo la tendencia al maximalismo penal, por tanto, no se descarta que se vayan creando nuevos tipos penales conminados con cadena perpetua” (Del Castillo, 2015, p.50). Entonces, los delitos sancionados con prisión vitalicia en el ordenamiento jurídico de Perú según el Código Penal son:

Art. 108 - C Sicariato agravado.

Art. 152 Secuestro agravado.

Arts. 173 y 173-A Delito de violación de menores.

Art. 189 Robo agravado.

Art. 200 Extorsión agravado.

Art. 279-B Arrebató o sustracción de armas de guerra.

No obstante, aunque estos delitos son castigados con la pena más severa que reconoce el sistema penal peruano, para Herrera (2017) “esto no ha detenido el elevado índice criminal,

ni mucho menos lo ha disminuido, para él, por el contrario, esta situación demanda otro tipo de medidas por parte del sector político, que no sea únicamente la agravación de penas” (p.106).

2.3 CHILE

Ricardo Froilán Lagos Escobar fue presidente de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006. En el año 2001, durante su mandato, la pena de muerte fue derogada y con ello se estableció en reemplazo de ella, la pena presidio perpetuo calificado.

La condena a cadena perpetua en Chile, o presidio perpetuo simple permitía a los condenados salir después de los 20 años de prisión y, en algunos casos, antes, aspecto que, al ser derogado cambió con el presidio perpetuo calificado, que se encuentra actualmente regulado por el Código Penal Chileno. La imposición de esta pena importa la privación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas que establece el Artículo 32 BIS:

1. No se podrá conceder la libertad condicional sino una vez transcurridos 40 años de privación de libertad efectiva, cumpliendo a las normas y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación.
2. El condenado no podrá ser favorecido con ninguno de los beneficios que contemple el reglamento de establecimientos penitenciarios, o cualquier otro cuerpo legal, que importe su puesta en libertad, aun en forma transitoria. Podrá autorizarse su salida, con las medidas de seguridad que se requieran, cuando su cónyuge, su conviviente civil, o alguno de sus padres o hijos se encontrare en inminente riesgo de muerte o hubiere fallecido.
3. No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan amnistía ni indultos generales, salvo que se le hagan expresamente aplicables. Sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de Estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo.

Lo anterior, se encuentra contemplado para delitos:

Código Penal Chileno.

Art. 106 Atentado contra la seguridad exterior de la República seguida de guerra

Art. 141 Secuestro con homicidio y/u violación, violación sodomítica.

Art. 150 Tortura con homicidio.

Art. 268 Homicidio a un fiscal del Ministerio Público.

Art. 390 Parricidio.

Art. 390 bis Feminicidio.

Art. 433 Robo con violación y/u homicidio.

Así, tal como se ha indicado, esta pena aparece como una alternativa a la pena de muerte que solo fue derogada en la legislación penal común, ya que se la dejó “subsistente en el Código de Justicia militar para los delitos cometidos en tiempos de guerra -sin distinción sobre si se trataba de una guerra externa o interna” (Oxman, 2017, p.3).

Con el fin de realizar un análisis comparativo más minucioso respecto a los diferentes ordenamientos jurídicos analizados, a continuación, se presenta un cuadro con la información de mayor relevancia permitiendo comparar las diferentes legislaciones y disposiciones previamente estudiadas, así:

ESTADO	COMISION DE DELITO QUE DA LUGAR A PENA DE CADENA PERPETUA	OBSERVACIONES
ESTADOS UNIDOS/ESTADO FLORIDA	Asesinato intentado en el primer grado. Asesinato intentado en el segundo grado. Violación sexual. Terrorismo.	Cada 15 años la persona es llevada a un comité de evaluación para posible libertad condicional. Debe cumplir mínimo dos por lo que el tiempo mínimo de pena privativa de la libertad son 30 años.
	Sicariato agravado. Secuestro agravado. Violación de menores.	La cadena perpetua puede ser revisada de oficio o a petición de parte por un juez, luego de 35 años

PERU	Robo agravado. Extorsión agravada. Arrebató o sustracción de armas de guerra.	de cumplimiento de la pena para la posible libertad condicional de quien fue condenado.
CHILE	Atentado contra la seguridad exterior de la República seguida de guerra. Secuestro con homicidio y/u violación, violación sodomítica. Tortura con homicidio. Homicidio a un fiscal del Ministerio Público. Parricidio. Femicidio. Robo con violación y/u homicidio.	No permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años, y esto solo con la aprobación por mayoría de los miembros en ejercicio de la Corte Suprema de Chile.

Del cuadro presentado, se evidencia el contraste normativo de los diferentes Estados comparados, la evolución legislativa de cada uno de los países es fundada en las necesidades de cada territorio.

Así las cosas, la duración de esta pena “va a depender del Estado y el número de delitos cometidos por el reo” (Correoneró, 2019, p. 6). Sin embargo, el hecho de que la pena de prisión de cadena perpetua “deje abierta una posibilidad a la libertad, supone simplemente que esa posibilidad va a ser en muchos casos más teórica que real”. (Sánchez, 2016, p.40).

2.4 ARGUMENTOS DOCTRINALES A FAVOR DE LA PENA PERPETUA.

En el debate que genera la aplicación de la cadena perpetua, hay dos posiciones: quienes están favor y aquellos que están en contra. A pesar de insistentes voces de rechazo hacia esta sanción, “que provienen no sólo del ámbito del derecho, sino de otras ciencias sociales como la sociología, la psicología, politología y de la criminología, esta pena permanece viva en los catálogos punitivos” (Figueroa, 2017, p. 47).

Por esta razón, quienes se inclinan por la cadena perpetua son los abolicionistas de la pena de muerte, piensan así, en la prisión vitalicia, como alternativa válida y viable que puede sustituir a la pena capital, criterio que efectivamente se sigue dando en distintos países del mundo. Esta justificación, empieza a tomar relevancia con Beccaria, quien da una ilustración a la mitigación y minimización de las penas. Con su tratado, *De los Delitos y las Penas*, defiende la vida e intenta luchar con la anulación de la pena de muerte, y, como expresa Figueroa (2017) “tal vez dio, sin quererlo, unas bases ideológicas a la pena perpetua” (p.50).

En efecto, Beccaria (1968) señala que el fin de las penas no es atormentar y afligir un ser sensible, ni deshacer un delito ya cometido. Para él, “es impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros delitos iguales” (p.34). Además, enseña, que “cualquier ejemplo que se da a la nación con la pena de muerte supone un delito, por el contrario, en la pena de esclavitud perpetua, un solo delito da muchísimos y durables ejemplos” (Beccaria, 1968, p.59).

Igualmente, vislumbra la esclavitud perpetua, como el llamo a esta pena, para la sociedad argumentando a su favor:

No es el freno más fuerte contra los delitos el espectáculo momentáneo, aunque terrible, de la muerte de un malhechor, sino el largo y dilatado ejemplo de un hombre, que convertido en bestia de servicio y privado de libertad, recompensa con sus fatigas aquella sociedad que ha ofendido. (Beccaria, 1968, p.58).

Cabe resaltar, como menciona Torres (2015) que le asigna una “función preventiva y de persuasión en cuanto a la tipificación de los delitos y las penas, pero no retributiva ni de

aflicción, pues el delito cometido no se puede deshacer, sin embargo, los futuros se pueden prevenir” (p. 17).

A saber, Jescheck (2003) argumenta y sigue una línea de justificación similar para esta pena:

El encierro perpetuo como pena resulta necesaria, tras la abolición de la pena capital, para mantener en la población la conciencia del Derecho y el sentimiento de seguridad jurídica. Mediante su previsión en la ley, su imposición y su ejecución penitenciaria, queda patente a los ojos de todos que existen bienes jurídicos del más alto rango cuya vulneración dolosa representa un delito especialmente grave, que la comunidad jurídica reacciona con la exclusión permanente de la colectividad de las personas libres (p.252).

En otras palabras, en un sistema de sanciones, basado en una política criminal, racional y humana la pena de muerte no tiene razón de ser y la protección a la sociedad puede garantizarse en forma satisfactoria con la reclusión a cadena perpetua. En lo que respecta a esta pena, su justificación se basa en evitar la reincidencia de los delitos cometidos, si bien la prisión vitalicia no puede disuadir al delincuente, que delinquirá, más allá de las penas que le esperen; quien sea condenado y no puede reinsertarse no reincidirá.

En definitiva, cuando se pretende rastrear los argumentos que ofrecen para de la cadena perpetua, “para valorarlos críticamente, predomina la sensación de que más que argumentar racionalmente se pretende ante todo apelar a los sentimientos de venganza de la población” (Cuerda, 2011, p.2) De ahí, un punto de vista social, que, a mayor pena, mayor sensación de justicia.

2.5 ARGUMENTOS DOCTRINALES EN CONTRA DE LA PENA PERPETUA.

Desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli y su teoría del modelo penal garantista, justifica la pena, aludiendo a que debe consistir, únicamente, “en sanciones taxativamente señaladas en la ley, sin que sea dable su agravación por la particular visión que el mundo

tenga del ciudadano que se ve expuesto a ella por la comisión de una conducta punible” (Torres, 2015, p.32). Es decir, la pena “no debe reeducar o resocializar al procesado dado que él tiene derecho de ser interiormente malvado y de seguir siendo lo que es” (Ferrajoli, 1995, p.224)

Así mismo, Ferrajoli, enmarca su rechazo en las penas privativas de la libertad de larga duración, señala que:

Si entendimos que diez o quince años es el tiempo máximo de reclusión humanamente tolerable, habremos de sostener que, este límite deberá establecerse por la ley, mediante la supresión de la cadena perpetua y la reducción proporcional de todas las demás penas privativas de libertad. La libertad como la vida, es en realidad un derecho personalísimo inalienable e indisponible y, por consiguiente, su privación total debería quedar prohibida. (Del Castillo, 2015, p. 38)

Además, autores como Barbero (2016) señalan que, la cadena perpetua tiene el carácter de inhumana, cruel y degradante basado en los siguientes argumentos:

1. La cadena perpetua es degradante porque priva al reo de forma absoluta de su autonomía personal. Al quitarle ese atributo esencial e inherente a su condición humana, la prisión de por vida será un instrumento para su destrucción permanente. (p.29).
2. La cadena perpetua es cruel e inhumana porque ocasiona al reo padecimientos psíquicos de gran intensidad, ocasionando desesperanza, desánimo, desaliento, desmotivación debido a la falta de expectativa de liberación. (p.30).
3. La prisión permanente es cruel e inhumana porque produce el deterioro de la personalidad del reo. A partir de cierto periodo de tiempo de privación de libertad, el condenado tiene un grave detrimento en el núcleo esencial de la persona. Su personalidad y partes sociales, cognitivas, comunicativas y emocionales se ven afectadas. (p.31).

Otro argumento usado en contra de la cadena perpetua es el que enseña Amnistía Internacional (1999), Señala:

Que la herencia de la cadena perpetua sin libertad condicional no se manifestará claramente hasta que pasen al menos unos años, y en el momento en que las cárceles se encuentren saturadas de una población de reclusos de avanzada edad, además, con sus necesidades de atención médica se verá allí las consecuencias de la aplicación de esta pena (p.164).

Además, sostiene que no halló prueba alguna de que las sentencias que se imponen en Estados Unidos de cadena perpetua tuvieran un efecto disuasorio menor que las condenas a muerte o las ejecuciones. Con esto, los países no tienen por qué temer que, “cualquier incremento de los delitos que pueda producirse estará relacionado a la no aplicación de la cadena perpetua más que con otros factores sociales o económicos que generan un aumento de la criminalidad” (Amnistía Internacional, 1999, p.173). A lo anterior, se suma la postura de Correonerio (2019) manifestando que:

No radica en prevenir delitos el endurecimiento de las penas. Incluso ahora, bajo la vigencia de la prisión permanente revisable se han cometido delitos. En EE. UU. en algunos estados está vigente la pena de muerte y eso no disuade al delincuente de cometer determinados delitos. (p.21)

Con lo anterior, se entiende que el endurecimiento de penas no sirve para disuadir, al delincuente. De esta manera comprender que “el énfasis de las penas debería alejarse del contexto carcelario y enfocarse en medidas que se tomen con la persona en libertad y en caso de considerarse indispensable el encierro” (Beltrán, 2019, p. 61)

Lo anterior permitió realizar un resumen, a lo que respecta es la cadena perpetua. Su historia, definición, características, comparación en el ámbito internacional y los argumentos usados para estar a favor y en contra de la misma, nos permite avanzar en el desarrollo del objetivo general y problema jurídico planteado desde el inicio. Que se relaciona con la efectividad de la pena de cadena perpetua como política criminal en la prevención, control y significativa disminución de conductas punibles que trata el título IV de la ley 599 de 2000.

3. DEFINICIÓN DE POPULISMO PUNITIVO.

El término populismo punitivo, es normalmente utilizado y entendido en un sentido común, como “una etiqueta para vincular a los políticos que idean políticas punitivas que parecen ser vistas como “populares” para la mayoría.” (Uribe, 2012, p.82). Sin embargo, este término, asemeja una cuestión algo más compleja de lo que se le reconoce en esta definición tan limitada. Este concepto, surge a mediados de los 80, en el intento de entender “los cambios sociales y su reflejo en la penalidad, se destaca un endurecimiento de las legislaciones penales y un crecimiento acentuado de la población carcelaria” (Larrauri 2006, p.15). Este dinámico cambio en los Estados Unidos ocasionó que se desarrollan hipótesis tratando de explicar el porqué de estas transformaciones.

Por un lado, surge con Garland el concepto de cultura y control, y con Bottoms el de populismo punitivo. Aunque estos conceptos se desarrollaron por diferentes autores, “sus diferencias son entonces, meramente, de alcance teórico” (Uribe, 2012, p.79). El primero, intenta explicar el fortalecimiento del sistema penal representado en más delitos, mayores penas y procedimientos más expeditos en estas suposiciones:

1. El poder de castigar la voz dominante de la política criminal ya no es la del experto, o siquiera la del operador, sino la de la gente sufrida y mal atendida, especialmente la voz de “la víctima” y de los temerosos y ansiosos miembros del público (Uribe, 2012, 79)
2. El derecho penal será utilizado por el Estado para defender a la sociedad frente al poder del delincuente y no por este último para defenderse del poder del Estado, se debe utilizar la prisión, el criminal es el enemigo y el derecho penal debe ser arma contra él. (Uribe, 2012, p. 79)
3. No hay que tener temor con el castigo, la pena solo se aplica a quien lo merece. (Uribe, 2012, p. 79)

El segundo concepto desarrollado por Bottoms: populism punitiveness - populismo punitivo, “si se amplía el análisis que se hace a estudiarlo, se encontrará que se está hablando

de cultura del control” (Uribe, 2012, p.80). En este orden de ideas, el significado que le dio este autor al término con el que intento describir la situación dada para la fecha es:

El populismo punitivo surge de políticas neoconservadoras y neoliberalismo económico que producen emergencia social, la cual se manifiesta en sentimientos de angustia y desesperación en el público; sensibilidades que son recogidas diligentemente por el político de turno que con una gran cuota de cinismo ofrece, la cabeza de uno de los otros, de cualquiera de los miembros de alguna clase sin representación o participación política alguna –negros, inmigrantes, pobres, etc. (Uribe, 2012, p.81)

En otras palabras, Bottoms, hace alusión a la utilización del derecho penal por parte de políticos, los cuales defienden sus tesis político-criminales buscando de cierta manera "réditos electorales, manifestando o proponiendo, supuestos como que el incremento en las penas conlleva automáticamente a una reducción de las tasas de delito, o que las penas refuerzan determinados consensos morales esenciales para la vida en sociedades” (Del Mar, 2019, p.59).

Por lo dicho, los medios de comunicación también hacen parte del populismo punitivo. A través de estos, muchas veces, “noticias rodeadas de escándalo, generan inmediatamente como reacción en la clase política la necesidad de postular el derecho penal, realizando como la única solución y como único remedio a tales males” (Muños, 2009, p.31)

Para el contexto colombiano, Del Mar (2019, p.60) presenta una definición de lo que es este concepto y lo que aproximadamente pretende:

1. Mediante propuestas para disminuir la consumación de delitos, los agentes del Estado buscan atraer la atención de la ciudadanía.
2. Sobre iniciativas tales como aumento de penas privativas de la libertad o creación de nuevos tipos penales, y que estas sean asimiladas como propuestas efectivas para erradicar la criminalidad.

3. Para así lograr un propósito político, el cual puede ser, una búsqueda hacia la reelección de un cargo.

Con lo anterior, el derecho penal viene siendo una reacción inmediata para “solucionar todos los problemas sociales, dejando a un lado el principio de subsidiariedad o ultima ratio característico del derecho penal, de un Estado democrático” (Velandia, 2014, p.103). Para lo cual, queda a consideración si existen realmente, límites a las propuestas de reforma normativa penal, aun en el caso de aquellas de iniciativa popular.

3.1. EL POPULISMO PUNITIVO EN COLOMBIA SU ALCANCE PARA LA CREACIÓN DE LEYES.

Para Colombia, los efectos del populismo punitivo se ven reflejados en la expansión del derecho penal explica Torres (2010) que la legislación populista en el país es notablemente una consecuencia de las ideas de los políticos y no del consenso (p.33). Sin embargo, resalta Velandia (2017)

No solo han sido los políticos los que han promovido la expansión excesiva del derecho penal en aras de satisfacer intereses personales, sino que diversos agentes y sectores sociales han tomado también el mismo patrón de actuación. Es decir, se ve reflejado en Colombia una fuerte actividad mediática que forja su dirección en legisladores-pueblo y es la que prima en la configuración de la política criminal. (p20).

Resulta importante identificar mediante hechos reales el alcance del populismo punitivo en la legislación penal colombiana. Para ello, se expondrán algunas iniciativas de reforma de la normatividad penal, que se han visto encaminadas en interponer políticas altamente punitivas en relación y con la búsqueda a la disminución y erradicación de determinados delitos donde la consideración colectiva sobre una conducta generadora de conflictos sociales se encuentra únicamente en el uso del derecho penal.

3.1.1 Femicidio

Con la Ley 1761 de 2015 se creó el tipo penal de feminicidio. Fue impulsada como resultado de la conducta delincuencia de la que fue víctima “Rosa Elvira Cely, mujer de 35 años. Javier Velasco Velásquez cometió en su contra los delitos de tortura, acceso carnal violento agravado y homicidio agravado” (Sentencia C-297-16). Con esta ley se expone la idea de reformar la normativa penal para hacer frente a un conflicto social determinado que es la violencia contra la mujer por motivos de género. Bajo esta óptica, Rafael Velandia (2017) expone algunas de las características que tuvo esta reforma normativa:

La ausencia de una valoración científica sobre su idoneidad para la resolución del conflicto social que pretendía enfrentar bajo una perspectiva de absoluta indiferencia hacia la evidencia existente, que apunta a que la situación de violencia letal y no letal en contra de la mujer no estaba en una situación de descontrol, según se explicó, para lo cual se valió del injustificado reconocimiento colectivo del que goza el derecho penal como mecanismo para hacer frente a conflictos sociales; prestigio que fue usado para evitar la discusión sobre su incapacidad y la idoneidad de mecanismos jurídicos distintos o de herramientas extrajurídicas en tal labor. Finalmente, debido a quienes fungieron como sus proponentes y a la presencia de los demás elementos arriba citados, se estima que se trata de un caso de punitividad electoral. (p.56)

Con lo anterior, la criminalización del feminicidio por la violencia letal y no letal en contra de la mujer por su condición de ser mujer “no es un fenómeno social nuevo y ya se hallaba criminalizado en la Ley 599 de 2000, por lo que no se halla justificación para la expedición de la Ley 1761 de 2015” (Velandia, 2017, p.54).

3.1.2 Lesiones con agentes químicos ácido y/o sustancias similares.

La Ley 1773 de 2016 conocida con el nombre de la Natalia Ponce, se presentó como una iniciativa después la comisión de un hecho muy mediatizado que generó gran conmoción y miedo en la sociedad. De esta manera, presentado ante los ojos de la población como la única solución efectiva para evitar que se generen nuevas conductas lesivas y nuevas

víctimas, esta ley incorporo elementos normativos que hicieron más drástica la pena si se cometía la conducta en contra de una mujer.

De esta manera Velandia (2017) enseña:

La política penal en relación con las agresiones mediante el uso de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas no puede centrarse en la criminalización y aumento de las penas, pues la evidencia ha demostrado que el derecho penal no tiene ningún carácter preventivo, ningún efecto disuasorio. Una política penal frente a estas agresiones concentradas en lo punitivo no es más que simbólica, lo que refuerza la importancia de la investigación criminológica sobre estos ataques para encontrar los medios apropiados para menguarlas. (p.78)

En términos generales, la Ley 1773 de 2016, se presentó como respuesta a pesar de que no se trataba del primer ataque de esa naturaleza ni el más grave, debido a quienes fungieron como sus proponentes “se estima que se trata de un caso en el que se mezclan la punitividad emocional y electoral” (Velandia, 2017, p. 78)

Se caracterizó por la ausencia de una valoración científica sobre su idoneidad para la resolución del conflicto social que pretendía enfrentar desde una perspectiva de absoluta indiferencia hacia la evidencia existente, que indica que las agresiones mediante el uso de agente químico, estaban en una situación de descontrol, valiéndose del injustificado reconocimiento colectivo del que goza el derecho penal como mecanismo para hacer frente a conflictos sociales; prestigio que fue usado para evitar la discusión sobre su incapacidad y la idoneidad de mecanismos jurídicos distintos o de herramientas extrajurídicas en tal labor. (Velandia, 2017, p. 80)

4. CADENA PERPETUA EN COLOMBIA: ANTECEDENTES DE LA CADENA PERPETUA EN COLOMBIA.

En Colombia, no han existido legislaciones que hayan establecido la cadena perpetua como pena, sin embargo, ha estado los últimos años en debate político tanto de senadores como de candidatos a la presidencia, los cuales serán mencionados a continuación:

Mediante el proyecto de Acto Legislativo 23 de 2007, se intentó modificar el artículo 34 de la Constitución Política proponiendo lo siguiente: “Procederá hasta la pena de prisión perpetua para los delitos de acceso carnal violento y homicidio doloso cometidos en menores de 14 años.”

Este proyecto establecía lo que el derecho comparado ha denominado “prisión perpetua revisable discrecional” es decir, la prisión perpetua podía ser revisada de oficio o a petición de parte, cuando el condenado hubiere cumplido los 35 años de privación de la libertad” (Cortés, 2009, p.151). Explica Cáceres (2019) después de la ponencia en primer debate:

Ante la ausencia de estudios criminológicos y sociológicos, así como el desinterés por procurar alternativas de prevención e indagación sobre las causas que generan este tipo de delincuencia, este proyecto de acto legislativo sólo pretendía ofrecer una solución aparente a las presiones sociales, especialmente, para apaciguar a los grupos de víctimas, con alternativas que, en el fondo, en nada resuelven el problema, con esto, no prospera (p.124)

Con el proyecto de Acto Legislativo 38 de 2007 a diferencia del anterior, amplía el ámbito de aplicación de la prisión perpetua: “procederá hasta la pena de prisión perpetua para los delitos de acceso carnal violento y homicidio doloso cometidos en menores de 14 años” El trámite surtido, luego de su publicación y posterior acumulación, “fue la presentación de ponencia para primer debate en la Comisión Constitucional respectiva, sin que la misma fuera llevada a cabo, por el retiro de su autor” (Cáceres, 2019, p.114) “Este proyecto cita diversos ordenamientos jurídicos extranjeros en los que se admite la prisión perpetua, también, se

refiere algunas notas sobre la peligrosidad de los delincuentes sexuales” (Cortés, 2009, p. 153)

Con el siguiente proyecto se modifica el instrumento constitucional utilizado en las otras oportunidades. El Proyecto de Ley 1327 de 2009 convoca a un referendo constitucional y somete a consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional. Tal iniciativa supera los debates en senado pasa a cámara y se convierte en Ley de la República, razón por la cual pasó a manos de la Corte Constitucional, quien, analiza cada uno de los vicios de procedimiento detectados, explica el por qué, en cada uno de ellos y decide declararla no ajustada al ordenamiento superior con la sentencia C-397 de 2010.

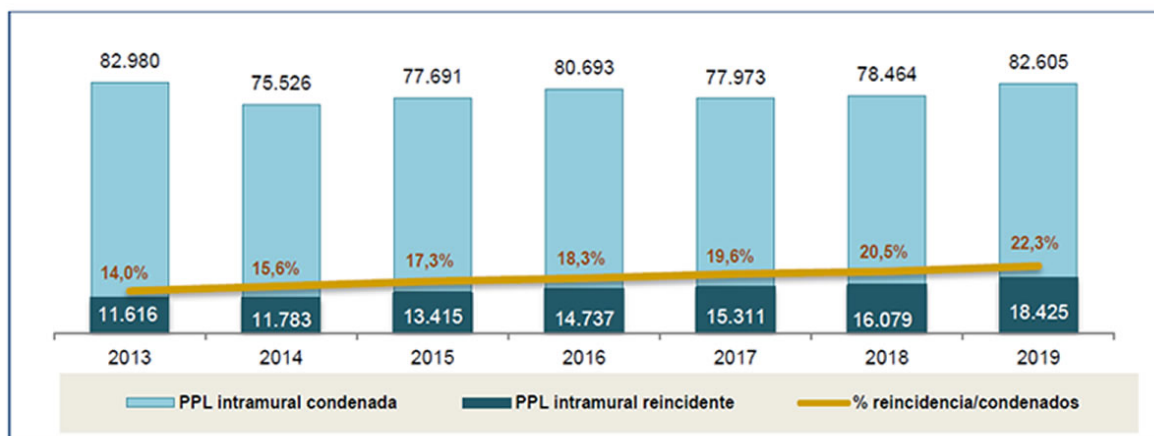
Actualmente, el Congreso de la República aprobó un acto legislativo, que pretende permitir de manera excepcional la cadena perpetua en Colombia. El Proyecto de Acto Legislativo número 001 de 2019 Cámara (acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo número 047 de 2019 Cámara) tiene como objetivo establecer en nuestro ordenamiento jurídico la prisión perpetua revisable cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o la víctima esté en incapacidad de resistir. La reforma propuesta pretende que, de manera excepcional, se pueda imponer hasta la pena de prisión perpetua, la cual tendrá control automático ante el superior jerárquico y será revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado. Autores como Rincón (2018) hacen referencia al choque de derechos que se presentan con la cadena perpetua.

La imposición de medidas radicales de privación de la libertad como la mencionada, a la par de representar una posible solución eficaz para la prevención de delitos graves cometidos contra niños, niñas y adolescentes, también traduce el cuestionamiento de si es suficientemente justificado sacrificar derechos como la libertad y dignidad humana por el establecimiento de la prisión perpetua para salvaguardar otros derechos. (p.5)

A lo que, autores como Córdoba (2014) señalan: “es injustificable privar a una persona de sus derechos fundamentales de forma permanente para proteger los derechos de otras personas, pues los derechos fundamentales vida, libertad y dignidad no obedecen a una

prevalencia de derechos, siendo universales e inalienables.” (p.68). De esta manera, la incidencia de delitos graves contra menores no se soluciona con la imposición de penas que menoscaban los derechos fundamentales. Según el Instituto Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec):

Tabla 1.



Fuente: SISIPEC – diciembre 2019 – Años anteriores a 2019, fecha de corte 31 de diciembre.

Tabla 2.

Delito	Delictividad PPL Intramural			Participación
	H	M	Total delitos	
Hurto	9.493	363	9.856	22,6%
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes	5.401	718	6.119	14,0%
Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones	5.713	110	5.823	13,3%
Homicidio	4.639	136	4.775	10,9%
Concierto para delinquir	3.547	415	3.962	9,1%
Extorsión	1.117	58	1.175	2,7%
Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones	1.069	36	1.105	2,5%
Lesiones personales	935	35	970	2,2%
Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos	794	17	811	1,9%
Violencia intrafamiliar	705	14	719	1,6%
Actos sexuales con menor de catorce años	612	4	616	1,4%
Secuestro simple	585	19	604	1,4%
Acceso carnal violento	517	3	520	1,2%
Receptación	511	8	519	1,2%
Acceso carnal abusivo con menor de catorce años	510	1	511	1,2%
Otros delitos	5.142	416	5.558	12,7%
Total	41.290	2.353	43.643	100,0%
Participación	94,6%	5,4%	100,0%	

Fuente Informe estadístico INPEC 2019

Con la tabla 1 se aprecia que desde el año 2013 el porcentaje de población reincidente es del 14 % y 2019 del 22 %, lo que muestra un incremento anual, sin embargo, con la tabla 3, informa el Inpec el tipo de delito que se presenta con mayor frecuencia en clave de reincidencia. Así, el hurto, el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes (o de armas) y el homicidio constituyen los tipos penales que presentan mayor repetitividad entre la población que delinque nuevamente, por el otro, el dato que también llama la atención es el de la baja reincidencia en los delitos contra la libertad y formación sexuales como actos sexuales con menor de 14 años, con 616 casos (1,4 %).

De esta manera, como explica Beltrán (2019):

Es necesario el cumplimiento real del principio de ultima ratio, para que se apoyen transformaciones sociales, los métodos alternativos de resolución de conflictos y el fortalecimiento de las instituciones tradicionales donde surge la socialización, así evitar el exceso de punición y limitar la creciente necesidad de penas restrictivas de la libertad. (p.79)

4.1. PACTOS INTERNACIONALES QUE HA SUSCRITO COLOMBIA COMO ESTADO: DONDE SE PROHÍBEN LAS PENAS IMPRESCRIPTIBLES, CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES.

Si se revisan los tratados internacionales, ninguno de aquellos que ha sido ratificado por Colombia desaprueba expresamente la prisión perpetua. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada por Colombia establece en su Artículo 5, numeral 2: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

Subraya la finalidad de las penas en su Artículo 5, numeral 6: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”

De acuerdo con la Convención, la pena de prisión cumple una función preventivo especial, que busca evitar la comisión de nuevos delitos, mediante diversas vías.

Inocuidad, corrección y reeducación, lo que evidencia una abierta incompatibilidad con funciones retributivas y con la pena de prisión perpetua por la aflicción inhumana, cruel, degradante, irracional y desproporcionada que ocasiona a los condenados, además de nugatoria de su recuperación (Torres, 2015, p.83).

Igualmente, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes estipula en su Artículo 16, Numeral 1 que: “Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura”.

Díaz (2005) por su parte, hace referencia a que la definición del derecho a la vida es inherente a la persona humana no puede entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho “debe exigir que los Estados adopten medidas positivas, es decir que sería oportuno que éstos tomarán todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida aun para quienes cometan delitos” (p.63).

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realza el alcance de la dignidad humana desde su preámbulo, además establece en el Artículo 2, numeral 2:

Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

En relación con la protección de los derechos humanos, el artículo 5 condiciona que ninguna disposición del Pacto puede entenderse como una autorización para destruir los derechos y libertades previstos o limitarlos en mayor medida de lo dispuesto en su contenido con el pretexto de que el instrumento no los reconoce, o lo hace en menor grado. Específica

Torres (2015) que esta disposición “debe verse en armonía con la prohibición de tortura o penas y tratos, crueles, inhumanos, degradantes.” (p.83).

Con lo anterior, los tratados internacionales suscritos por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, y el país no puede romperlos de forma unilateral. La incorporación de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico violaría los tratados internacionales ratificados por Colombia que prohíben las penas crueles, inhumanas y degradantes, ya que no existe una resocialización efectiva del condenado.

4.2. CONSTITUCIONALIDAD

Es necesario realizar una precisión respecto a la viabilidad constitucional que tiene la cadena perpetua. En primer lugar, el preámbulo de la Constitución realza los derechos de libertad e igualdad que fueron promulgados por el pueblo. Así mismo, el artículo primero establece que el Estado colombiano se funda en la dignidad humana y el segundo que el Estado y las autoridades están instituidas para proteger a los colombianos en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, aunado a esto el artículo 12 sostiene que nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a lo que las últimas se definen como aquellas que "por sus características provocan graves sufrimientos físicos y mentales, el desprecio al reo, sin importar la condición humana y de los derechos del mismo adicionando la humillación que provoca al sujeto que la recibe" (Córdoba, 2014, p. 41). Así, tal como se vio en el ítem 4.2, el artículo 12 de la Constitución Política se encuentra en sintonía con los diferentes tratados internacionales que Colombia ha ratificado.

Igualmente, y no menos importante, el artículo 34 de la Carta Política dispone:

Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

En el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, “los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo” (Torres, 2015, p. 86).

En este sentido, la Constitución Política es norma rectora y es fundamental que las disposiciones del Código Penal, que rigen la imposición de las penas, sean desarrolladas bajo el respeto absoluto de la Carta Política y los preceptos referidos a los derechos fundamentales que se relacionan con el derecho penal.

En lo que respecta a la cadena perpetua, aun siendo inconstitucional, si se formulara una propuesta de acto legislativo, después de ser aprobada en los respectivos debates de cámara y senado, el control de constitucionalidad será de carácter formal y no material. Es decir, que el control girara en torno a los debates, conciliaciones y modificaciones del texto que se realizaron en el congreso durante el trámite del acto legislativo. Aun si se tramitara por medio de referendo, deberá realizar un control de constitucionalidad y revisar si, un cambio en tal sentido equivale o no a una sustitución de la Constitución Política y, por ende, inaceptable y “sólo posible en el evento de que fuera aprobado por una Asamblea Constituyente” (Velandia, 2014, p. 104). Aunado a esto, revisar “los aspectos desocializantes que conlleva la permanencia en una cárcel o centro de reclusión como el hacinamiento” (Beltrán, 2019, p. 59) resulta relevante para la aplicación de esta pena en Colombia, pues como explica Beltrán (2019) esto no solo implica una sobrepoblación, sino también, los espacios reducidos con que cuentan los reclusos, la imposibilidad de espacios de recreación, la falta de camas para dormir y la posibilidad no llegar a brindar en su totalidad el acceso a programas de resocialización (p.65)

4.3 FINES Y FUNCIONES DE LA PENA.

Como ya se ha expuesto, la Constitución Política de Colombia señala parámetros generales a los cuales se debe ceñir la regulación e implementación del derecho penal. La ley

599 de 2000 en sus artículos 3 y 4 trae los principios de las sanciones penales, así como las funciones de la pena.

Ley 599 de 200 Código Penal Colombiano:

Artículo 3°. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.

Artículo 4°. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.

4.3.1 Prevención general

Este fin de la pena ofrece dos enfoques, positivo y negativo. El primero orienta a que,

La función de la pena no va dirigida ni a los infractores actuales ni a los potenciales, sino sobre todo a los ciudadanos fieles a la ley, a los que se supone tienen tendencia espontánea a respetarla. Ello no con el fin de prevenir los delitos, sino el de restablecer la confianza institucional en el ordenamiento quebrantada por percepción desviación (Alcácer, 1998, p.450-457).

El segundo, concibe la ley penal como un mensaje disuasivo “dirigido a crear una contra-motivación a los potenciales transgresores. Es decir, el mensaje es la intimidación, atemorizar al ciudadano para que no delinca” (Córdoba, 2001, p.59)

4.3.2 Retribución justa

La imposición de la pena “busca restituir el valor de la justicia en abstracto, el cual se supone debe imperar en la tierra, siendo la sanción el resultado racionalmente necesario de la infracción de la ley” (Cote, 2007. p.198). Además, la pena impuesta ha de ser proporcional a la culpabilidad. En este orden de ideas, una infracción leve con unas circunstancias comprensibles justificaría una imposición leve, mientras que una infracción altamente reprochable justificaría una pena grave.

4.3.3 Prevención especial

Explican los profesores Córdoba y Ruiz (2001) que, con la teoría de la prevención especial, se busca tratar de evitar la comisión de nuevos delitos por parte de quienes ya han transgredido el ordenamiento penal, “quien ha cometido una conducta punible es un sujeto peligroso, diferente de lo normal, al que se debe tratar de corregirlo, resocializarlo o inocuizarlo” (p. 60).

4.3.4 Reinserción social

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C - 261 de 1996 estableció que la función de reeducación y reinserción social del condenado:

Debe entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer este desarrollo. Adquiere así pleno sentido la imbricación existente entre la dignidad, la humanidad en el cumplimiento de la pena y la autonomía de la persona, en relación todas con la función resocializadora como fin del sistema penal. (p.20)

Además, dispuso que la función resocializadora del sistema penal adquiere relevancia constitucional, no sólo desde el punto de vista fundamental de la dignidad, sino también como expresión del libre desarrollo de la personalidad humana.

Ha señalado además la Corte Constitucional respecto a la finalidad de la pena, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin resocializador, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas.

Sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece. De esta manera, el proceso resocializador no debe llevarse a cabo en su totalidad en el sistema penitenciario, sino debe ir más allá con “la creación de programas y propuestas postpenitenciarias que permitan una mejor interiorización de lo aprendido en la

cárcel y por medio de las que se pueda brindar herramientas para insertarse en la sociedad” (Beltrán, 2019, p.70)

No puede perderse de vista que en un Estado Social de Derecho la resocialización de la persona condenada es relevante como fin de la pena, si se niega de manera absoluta este aspecto, “la pena se vuelve desproporcionada y, según la jurisprudencia internacional, constituye un trato cruel, inhumano o degradante, prohibido por la Carta Política” (Hodwalker, 2019, p.4)

En la Sentencia C-565 de 1993, la Corte analizó la constitucionalidad de la pena máxima del delito de secuestro, en esa ocasión recalcó la necesidad de poner límites a las penas de prisión basados en la resocialización:

Por las expresadas razones, lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enluta su conducta, la efectiva reinserción en sociedad, aspecto éste que, por no constituir el contenido de las normas demandadas, no puede la Corporación entrar a analizar en esta oportunidad. (p.31)

Con lo anterior, “se habla de reinserción social, como un término equivalente con el de resocialización” (Beltrán, 2019, p.30), concepto con el cual como explica Beltrán (2019), se espera:

Que la persona asuma a través de unos programas estatales, una actitud receptiva y se integre a planes educativos, laborales, de valores y disciplina que aseguren la modificación de patrones de conducta que lo llevaron a delinquir por unos que le permitan una mejor integración a la sociedad en la que irá saliendo de manera reglada a través de la progresividad de la pena (p.49)

CONCLUSIONES.

Para contestar el problema de investigación, respecto a la viabilidad de incorporar la cadena perpetua en la legislación colombiana, como respuesta adecuada y eficiente para la prevención, control y significativa disminución de las conductas punibles que se derivan del título IV de la Ley 599 de 2000, se hizo un recorrido de estudio basado en los antecedentes y definición de la cadena perpetua, además, una comparación con derecho internacional y legislaciones que regulan y aplican esta pena. Estudiamos argumentos a favor y en contra de la pena perpetua. Profundizamos en el populismo punitivo en Colombia, los pactos internacionales que ha suscrito Colombia como Estado que se acomodan a la inconstitucionalidad de la cadena perpetua como pena. Los fines y funciones de esta; para concluir que la misma no es la respuesta adecuada como política criminal para la prevención, control y erradicación de las conductas punibles que se refiere el Título IV del código penal colombiano, en atención a lo siguiente:

- El derecho comparado permite resaltar que la comisión de los delitos aun para aquellos que tienen como pena máxima la cadena perpetua no se encuentran erradicados. Por el contrario, los delitos sexuales siguen estando presente en los ordenamientos jurídicos internacionales. Es decir, que no hay ninguna teoría científica que respalde las afirmaciones que con la pena perpetua se logra una prevención o erradicación de las conductas punibles contra la libertad, integridad y formación sexual.
- El delito no se puede combatir exclusivamente con el incremento de las penas. Los aumentos punitivos bajo los mismos supuestos, no solucionan la problemática social de la criminalidad de los delitos sexuales. En cambio, permite el estancamiento del fin preventivo o disuasorio, constantemente se acude a esta “solución”, que, además aporta al sistema carcelario en un hacinamiento perpetuo, empeoran la evidente crisis y hacen imposible la superación del Estado.
- El populismo punitivo evidencia su alcance para la creación de leyes con la cadena perpetua en Colombia. En nuestro país ya existe una pena que supera la vida de los colombianos. De acuerdo con el DANE, la expectativa de vida es de 76 años y la pena

máxima en nuestro ordenamiento penal alcanza los 60 años. Es decir, que ya existe una cadena perpetua sin posibilidad de revisión como se vislumbra en los ordenamientos jurídicos internacionales. De un lado, se puede evidenciar la necesidad de endurecer las penas a quienes hayan cometido crímenes atroces en contra de menores de edad, pero, por otro lado, la normatividad Constitucional que excluye la existencia de prisión perpetua en Colombia.

- Es necesario para nuestro país establecer límites en la capacidad de respuesta del sistema penal y no contribuir con la falsa ilusión de soluciones que no le son posibles. Que, por el contrario, son dinámicas ligadas concretamente al fenómeno de control político-social, participación política y populismo penal.
- La cadena perpetua no es la solución para la disminución o erradicación de la comisión de delitos sexuales, por el contrario, es necesario la realización de investigaciones criminológicas, que permitan entender y plantear soluciones idóneas que se encuentren dentro del ámbito jurídico y constitucional, respetando el principio de subsidiariedad o ultima ratio característico del derecho penal, de un Estado democrático, si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, al contrario con esta pena agudizaría la crisis.

BIBLIOGRAFIA.

- Aguirre, S. (2011) La Cadena perpetua en el Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Derecho y Ciencia Política. Tesis. Lima – Perú.
- Agudelo, O.; León, J.; Prieto, M.; Alarcón, A. y Jiménez, J. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación. Universidad Católica de Colombia. Bogotá – Colombia.
- Alcácer, R. (1998) Los fines del Derecho penal. Una aproximación desde la filosofía. Universidad Complutense, Madrid – España.
- Amnistía Internacional (1999) Error capital la pena de muerte frente a los derechos humanos, editorial amnistía española internacional (EDAI) Madrid – España.
- Arce, L. (2017) Comparativo entre la Aplicación de las Penas, Florida Estados Unidos-Colombia. Universidad la Gran Colombia Facultad de Derecho Programa Transferencia Profesionales. Bogotá – Colombia.
- Barbero, M. (2016) Contra la cadena perpetua. Ediciones Universidad de Castilla - La Mancha – España.
- Beccaria, C. (1968) De los delitos y las penas. Alianza editorial. Madrid – España.
- Beltrán, L. (2019) El fin de la pena privativa de la libertad: Entre la utopía y el confinamiento Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Departamento de Derecho. Bogotá - Colombia
- Bottoms, A. (2004) “Public opinion and community penalties”, en Alternatives to Prison, Options for an insecure society, editado por: Sue Rex, Gwen Robinson Willan Publishing. Portland- EE. UU.
- Cáceres, E. (2019) Prisión perpetua en Colombia. Análisis de las iniciativas legislativas para su autorización, y de los argumentos racionales para su incorporación en el

ordenamiento colombiano. Revista Nuevo Foro Penal Vol. 15, No. 93, pp. 111-224, Universidad EAFIT, Medellín – Colombia.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (1987) Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984.

Córdoba, A. (2014). Viabilidad Constitucional de incorporar la pena de prisión perpetua en la legislación colombiana, para delitos graves contra niños, niñas y adolescentes. Trabajo de grado para optar al título de Especialista En Derecho Probatorio Penal, Fundación Universitaria Católica del Norte. Medellín- Colombia.

Córdoba, M.; Ruiz, C. (2001) Teoría de la pena, Constitución y Código Penal. *Derecho Penal Y Criminología*, 22(71), 55-68. Recuperado a partir de <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1091>

Cortés, L. (2009) Reflexiones sobre la propuesta de reforma constitucional en Colombia para la introducción de la cadena perpetua Volumen 30. Derecho Penal y Criminología. España.

Correoner, J. (2019) La introducción de la prisión permanente revisable en el código penal. Comillas Universidad Pontificia Madrid - España.

Cote, E. (2007) La necesidad de la pena - reflexiones a partir de los artículos 3 y 4 del código penal colombiano. Universidad Javeriana. Bogotá – Colombia.

Cuerda, A. (2011) La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: Por qué son inconstitucionales en España. Colección: Justicia Penal. Universitat Pompeu Fabra. Editorial atelier libros. Barcelona – España.

Del Castillo, S. y Collantes, M. (2015). Análisis de la Cadena Perpetua en relación con los Derechos Humanos. Universidad Científica del Perú Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Trabajo de grado. Perú.

- Del Mar Reyes, M. (2019). El Populismo Punitivo en los delitos sexuales en Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia.
- Díaz, O.; Cáceres, V.; Chacón, N.; Gómez, W. (2005) Convención Americana de Derechos Humanos. Art.4 la pena de muerte. Universidad Autónoma de Colombia. Editorial Ibáñez. Bogotá – Colombia.
- Espejo, C. (1996) Penas corporales y torturas en Roma. Universidad de Granada. Flllib, 7 pp. 93 – 111. España.
- Ferrajoli, L. (1995) Derecho y razón teoría del garantismo penal. Editorial Trotta. Madrid – España.
- Figueroa, P. (2017). Implicancias de la imposición de la Cadena Perpetua en diferentes figuras delictivas en el establecimiento penitenciario de potracancha. Tesis. Universidad de Huánuco. Perú.
- Herrera, V. (2017) Pena de muerte en Perú: De la imposibilidad de desconocer los convenios internacionales de derechos humanos, y de la crueldad en su aplicación. Tesis Doctoral, Toledo – España.
- Hodwalker, M.; Cardozo, J.; Rodríguez, R.; (2019) Estudio al Proyecto de Acto Legislativo No. 001 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable” Consejo Superior de Política Criminal. Bogota – Colombia.
- Jescheck, H. (2003) Tratado de Derecho Penal, [Editorial Comares](#). Volumen I. Granada – España.
- Larrauri, E. (2006) “Populismo punitivo... y cómo resistirlo” en Jueces para la democracia, Nº 55, Madrid – España.
- Labardini, R. (2008) Contexto Internacional de la prisión vitalicia. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, pp. 307-359. México.

- Montero, D.; Maldonado, M.; Manrique, F. (2017) Prisión perpetua revisable: El caso colombiano desde la perspectiva constitucional, Artículo de investigación resultado de trabajo cooperado entre: Grupo de Investigación: Escuela de Derecho Penal NULLUM CRIMEN SINE LEGE UN de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá – Colombia.
- Muñoz, J. (2009) Populismo punitivo y una “verdad construida” Universidad de Antioquia. Colombia. Medellín – Colombia.
- ONU: Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966) Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 16 diciembre 1966, Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 999, p. 171.
- Organización de los Estados Americanos (OEA) (1969) Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"
- Oxman, N., & Guarda, C. G. (2017) La pena de presidio perpetuo calificado en Chile y los derechos humanos.
- Posada, M. (2016) La pena y derecho a la reinserción social en el sistema constitucional. Tesis para optar al título de Máster en derecho penal. Universidad Eafit. Medellín – Colombia.
- Rincón, M. (2018). La viabilidad de la aplicación de la cadena perpetua como sanción para delitos graves cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Universidad Católica de Colombia. Trabajo de grado. Bogotá – Colombia.
- Sánchez, M. (2016) La prisión permanente en las legislaciones española y alemana. Universidad Granada. Murcia – España.
- Sotomayor, J. (2013). Las recientes reformas penales en Colombia: un ejemplo de irracionalidad legislativa. *Nuevo Foro Penal*, 3(71), 13-66. Medellín – Colombia. Recuperado a partir de <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/1846>

- Torres, M. (2015). La pena de prisión perpetua en Colombia. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Trabajo de grado para Maestría. Bogotá – Colombia.
- Torres, N. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales, área de Derecho Penal Escuela de Derecho, Universidad EAFIT. Medellín – Colombia.
- Uribe, J. (2012) ¿Puede hablarse de populismo punitivo en Colombia? Revista Nuevo Foro Penal Vol. 7, pp. 70-106 Universidad EAFIT. Medellín – Colombia.
- Velandia, M.; Gómez, A. (2018) Cadena perpetua y predicción del comportamiento. Un análisis sobre la delincuencia en contra de menores de edad y la política penal en Colombia. Revista Republicana. Bogotá – Colombia.
- Velandia, R. (2017). Del populismo penal a la punitividad: La política penal en Colombia en el siglo XXI. Universidad Católica de Colombia. Colección Jus penal; Bogotá – Colombia.
- Velandia, R. (2014) Sobre la legitimidad de la opinión pública como sustento de la política criminal. Universidad la Gran Colombia. Novim Jus Volumen 8 No. 1. Bogotá – Colombia.

JURISPRUDENCIA

- Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-565, del 7 de diciembre de 1993, Magistrado Sustanciador, Dr. Hernando Herrera Vergara.
- Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C – 261, del 16 de mayo de 1996, Magistrado Ponente. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
- Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-397 de 2010, Magistrado Ponente, Dr. Juan Carlos Henao Pérez.

Corte Constitucional, (2016). Sentencia C-297 de 2016, Magistrado Ponente, Dr. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Sentencia de la Primera Sala, 21 de julio de 1977. 1BvL 14/76 del STG.

NORMATIVIDAD

Asamblea Constituyente, (1991). Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá - Colombia

Congreso Constituyente Democrático, (1993). Constitución Política de Perú de 1993. Lima – Perú.

Congreso de la Republica de Colombia. (2000) Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano. Bogotá – Colombia.

Congreso de la Republica de Colombia, (2015). Ley 1761 de 2015. Bogotá – Colombia.

Congreso de la Republica de Colombia, (2007). Proyecto de Acto Legislativo 23 de 2007. Bogotá – Colombia.

Congreso de la Republica de Colombia, (2007). Proyecto de Acto Legislativo 38 de 2007. Bogotá – Colombia.

Congreso de la Republica de Colombia, (2009). Proyecto de Ley 1327 de 2009. Bogotá – Colombia.

Congreso de la Republica de Colombia, (2018) Proyecto de Acto Legislativo No. 066 de 2018. Bogotá – Colombia.

Congreso de los Diputados, (1848). Código Penal de España 1848. Madrid – España.

Congreso de los Diputados, (1870) Código Penal de España 1870. Madrid – España.

Congreso de la Republica de Perú, (1991). Decreto Legislativo No. 635. Código Penal de Perú. Lima – Perú.

Congreso Nacional Santiago, (1874). Código Penal de Chile. Santiago – Chile.

The Florida Senate, Florida Statutes, (2019). Title XLVI. Chapter 775. Tallahassee – Florida.